

CONSTANCIA SECRETARIAL: Quibdó, 10 de diciembre de 2020. Llevo el proceso al Despacho de la señora Juez para surtir el trámite correspondiente. SIRVASE PROVEER.



YULY CECILIA LOZANO MARTINEZ
Secretaria

RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ

Quibdó, diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020).

AUTO INTERLOCUTORIO No. 846

RADICADO:	27001333100120060019700
EJECUTANTE:	ARMANDO JOSE BECHARA ANDRADE
EJECUTADO:	MUNICIPIO DE BAGADO
NATURALEZA:	EJECUTIVO
ASUNTO:	DECIDE SOLICITUD

Mediante mensaje de datos enviado al correo electrónico institucional del Despacho el día 21 de septiembre de 2020, solicita se decrete el embargo sobre los recursos que pueda tener la entidad ejecutada Municipio de Bagado en los bancos Agrario, de Bogotá, AV Villas, BBVA y Popular de la localidad.

Aunado a lo anterior, depreca que se oficie al señor Alcalde del ente ejecutado a efecto de que atienda la orden impartida de pago.

Adicionalmente, solicita aplicar la medida de embargo a cualquier remanente que obre a favor del ente ejecutado en procesos a cargo del Despacho y que resulte embargable con el ánimo de lograr el recaudo del valor del crédito.

En virtud de lo anterior, el Despacho analizará la procedencia o no de las solicitudes deprecadas en este asunto.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA

El principio de inembargabilidad busca proteger los dineros del Estado para asegurar de esa forma que se apliquen a los fines de beneficio general que les corresponden, haciendo realidad el postulado de prevalencia del interés general. Es una garantía que permite proteger los recursos financieros para el cumplimiento de las finalidades propias de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Este principio se materializa en el cumplimiento de la acción pública por parte de sus diferentes órganos y conlleva la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos a través de las diferentes tareas que asume el Estado frente a la colectividad.

Entre dichas tareas y funciones se encuentra la prestación de servicios públicos como el de seguridad social del artículo 48 de la Constitución política que prohíbe destinar los recursos de las instituciones de la seguridad social a fines diferentes a ella.

✶

**RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
REPUBLICA DE COLOMBIA**



JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ

En el artículo 63, a su vez se prohíbe el embargo de los bienes y rentas de las entidades públicas, así como de los bienes de uso público de propiedad de la Nación y además aquellos que determine la ley. Entre estos últimos se encuentran los bienes, las rentas y los recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema de participación, regalías y los recursos de la seguridad social (artículo 594. 1 Código General del Proceso).

Las medidas cautelares tiene amplio sustento constitucional, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal (artículo 13, 228 y 229 de la Constitución Política).¹ Tienen como objeto evitar que los bienes se sustraigan del patrimonio del deudor y asegurar por lo tanto la ejecución de la sentencia estimatoria. En igual sentido, el Consejo de Estado ha afirmado que las medidas cautelares: *“Buscan prevenir y precaver las contingencias que pudieren sobrevenir sobre los bienes o las personas mientras se inicia o se adelanta un proceso. En opinión de CARNELUTTI, estas medidas buscan evitar aquellas alteraciones en el equilibrio inicial de las partes puedan derivar de la duración del proceso”*².

Ahora bien, en cuanto al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, se tiene que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado en reiterados pronunciamientos han sostenido que la medida cautelar de embargo resulta procedente siempre y cuando la acreencia estuviese contenida en una sentencia judicial o título valor o acto administrativo que contenga obligaciones claras, expresas y exigibles, que no hayan sido acatadas en los términos y procedimientos fijados en los estatutos procesales aplicables.

En efecto, en sentencia C-546 de 1992 en la que se revisó el artículo 16 de la Ley 38 de 1989 respecto al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, la Corte Constitucional determinó que si bien dicha norma resultaba exequible, lo cierto es que al presentarse colisión entre la protección de los recursos económicos del Estado y amparo del derecho fundamental al pago de salarios de los trabajadores vinculados con aquel, siempre debía primar el derecho fundamental al pago de la citada remuneración.

Consideró posteriormente, el máximo Tribunal Constitucional en la sentencia C-354 de 1997 que el principio de inembargabilidad general no es absoluto, pues debe ceder **“cuando se trate de sentencias judiciales, con miras a garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos a las personas en dicha sentencia”**; así como ante las obligaciones contenidas en cualquiera de los modos o formas de actuación administrativas que regula la Ley.

Concluyó que los créditos a cargo del Estado, bien sea que conste en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento previsto en la norma y solo transcurrido el término para que ellos sean exigibles es posible adelantar la ejecución, con embargo de recursos del presupuesto, en primera medida, de los destinados al pago de sentencias o conciliaciones cuando se trate de esta clase de títulos, y en segunda medida, sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.

También en las sentencias C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1154 de 2008 y C-539 de 2010 la Corte Constitucional reiteró su postura en cuanto al principio de inembargabilidad y sus excepciones, tesis adoptada por las diferentes secciones del Consejo de Estado en sede de tutela

¹ Tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional en sentencia C-490 del 4 de mayo del 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

² Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto de 26 de marzo de 2009. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Expediente 34882.

**RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
REPUBLICA DE COLOMBIA**



JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ

al revisar las decisiones de los Tribunales Administrativos del país respecto de la no aplicación de las medidas cautelares de embargo en virtud de lo consagrado en el artículo 594 del C.G.P³.

Conforme lo expuesto y atendiendo los reiterados pronunciamientos del Tribunal Administrativo del Chocó y del Consejo de Estado sobre la procedencia del embargo frente a los recursos públicos, el Despacho accederá a la medida cautelar solicitada por la parte ejecutante, toda vez que la acreencia aquí ejecutada corresponde a créditos contenidos en una conciliación judicial de donde se derivan obligaciones claras, expresas y exigibles; criterio que se mantendrá hasta tanto el máximo Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, profiera Sentencia de unificación respecto del presente asunto, como lo anunció en providencia del 25 de abril del año 2019.

En ese orden de ideas, se ordenará que por secretaría se oficie a los Bancos Agrario, de Bogotá, AV Villas, BBVA y Popular de la ciudad de Quibdó para que retengan los dineros que tenga el Municipio de Medio Baudó en dichas instituciones financieras.

Dichos recursos deberán retenerse hasta el 15% y los deberán poner a disposición de este Juzgado en la cuenta de depósitos judiciales No. 270012045104 del Banco Agrario de esta ciudad.

Se advierte que esta orden recae única y exclusivamente sobre los dineros que no tengan el carácter de inembargables en los términos del artículo 594 del C.G.P.

La anterior medida cautelar de embargo será limitada hasta la suma de **TRECE MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVO (\$13.114.983,61)**.

Respecto a la solicitud de cumplimiento de la orden de pago impartida, deprecado en este asunto por la apoderada de la parte ejecutante, el Despacho no accederá a la misma, toda vez que ya fueron proferidas todas las decisiones tendientes al pago de la obligación aquí ejecutada, esto es, el mandamiento de pago (auto interlocutorio No. 298 del 17 de mayo de 2005) y la sentencia de seguir adelante la ejecución (No. 149 de agosto de 2009), sin que exista trámite a cargo del Juzgado por surtirse y teniendo en cuenta que toda la actuación procesal se ha surtido conforme los parámetros legales.

En cuanto a la solicitud de embargo de remanentes, se le requerirá a la apoderada de la parte ejecutante para que suministre en el término de la distancia información precisa de los procesos respecto de los cuales pretende que se decrete el embargo de remanentes para este asunto, esto, es, radicado y demandante.

En consecuencia, se

DISPONE:

PRIMERO: DECRETESE el embargo y retención de los dineros que llegare a tener el Municipio de Medio Baudó en los Bancos Agrario, de Bogotá, AV Villas, BBVA y Popular de la ciudad de Quibdó, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

³ Sentencia del 24 de octubre de 2019. Magistrada Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicado No. 11001-03-15-000-2019-03488-01. Actor Cooperativa de médicos especialistas del Chocó y Afines – Coomesa.

RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ

Dichos recursos se retendrán hasta la suma de **TRECE MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVO (\$13.114.983,61)** y en un 15% del valor de las cuentas afectadas.

Se advierte que esta orden recae única y exclusivamente sobre los dineros que no tengan el carácter de inembargables en los términos del artículo 594 del C.G.P.

La retención ordenada deberá consignarse en la cuenta de DEPÓSITOS JUDICIALES que este Juzgado tiene en el Banco Agrario de esta ciudad bajo el código 270012045104 y dar aviso a este despacho dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de esta comunicación.

Librense los oficios correspondientes para tal fin.

SEGUNDO: NIEGUESE la solicitud de cumplimiento de la orden de pago impartida efectuada por la apoderada de la parte ejecutante, por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: REQUIERASE a la apoderada de la parte ejecutante para que suministre en el término de la distancia información precisa de los procesos respecto de los cuales pretende que se decrete el embargo de remanentes para este asunto, esto, es, radicado y demandante.

CUARTO: Una vez allegada la información requerida, retorne el proceso a despacho para proveer lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO
Jueza

<p>NOTIFICACION POR ESTADO</p> <p>JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ</p> <p>En la fecha se notifica por Estado No. <u>60</u>, el presente auto.</p> <p>Hoy <u>11</u> de <u>12</u> de <u>20</u>, a las 7:30 a.m</p> <p> Secretario</p>
